

Bogotá, D.C., 09 de julio de 2021.

Señoras(es):

JUZGADO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (REPARTO).

E. S. D.

Referencia	ACCIÓN DE TUTELA. – DERECHOS A LA SALUD, AL TRABAJO Y A ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS. PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO.
Accionante:	<u>JULIAN RICARDO CAMARGO CASTRO C.C. 1.052.396.422</u>
Accionados:	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC NIT: 900.003.409-7 y UNIVERSIDAD LIBRE.

Yo, **JULIAN RICARDO CAMARGO CASTRO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1.052.396.422** de la ciudad de **Duitama** obrando en causa propia en calidad de participante admitido del proceso de selección No. 1487 de 2020 DISTRITO CAPITAL 4 de la Secretaría Distrital de Movilidad, a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) y la Universidad Libre (en adelante Unilibre), acudo ante su despacho muy respetuosamente para instaurar ACCIÓN DE TUTELA de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, para que judicialmente se conceda la protección inmediata a mis derechos fundamentales a la ***SALUD, AL TRABAJO Y A ACCEDER A CARGOS PÚBLICOS***, además de ***LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO***, que están siendo vulnerados por parte de la CNSC y la Unilibre, **al citar a la presentación de las pruebas escritas el 18 de julio de 2021, sin existencia del protocolo de bioseguridad y en incumplimiento de la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para las actividades económicas, sociales y del Estado, y por estar desarrollando el proceso de selección en contravía del artículo 14 del Decreto LEGISLATIVO 491 del 28 de marzo de 2020 que los suspendió durante la vigencia de la emergencia sanitaria (actualmente prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021 en virtud de la Resolución 738 de 2021 del Ministerio de Salud) y reactivados ilegalmente por una norma de menor jerarquía como lo es el Decreto REGLAMENTARIO 1754 de 2020.**

La presente acción de tutela tiene como base los siguientes:

I. HECHOS.

Primero. Desde el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud – OMS declaró que el brote del virus COVID-19 es una pandemia. A partir de esta declaración se surtieron unas recomendaciones a todos los Estados para tomar medidas tendientes a prevenir, controlar y reducir el contagio del virus, y fue así como el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la emergencia sanitaria con una adopción de medidas sanitarias en todo el territorio nacional.

Segundo. La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sido prorrogada por sucesivas resoluciones del Ministerio de Salud, y actualmente se encuentra prorrogada hasta el 31 de agosto de 2021 en virtud de la Resolución 738 de 2021.

Tercero. En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 777 del 02 de junio de 2021 por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.

Cuarto. La Resolución 777 de 2021 en su artículo 4 establece los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades mediante un sistema de ciclos diferenciados por el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal constituido por el artículo 3 de la misma resolución y la cobertura de la vacunación.

A su vez, los artículos 6 y 7 de la Resolución anteriormente mencionada establecen y definen el protocolo de bioseguridad así como de la adopción, adaptación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado.

Quinto. Desde el 30 de diciembre del 2020, se viene adelantando convocatoria a través del proceso de selección en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleados en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Movilidad, mediante el Acuerdo No. 0409 del 30 de diciembre de 2020 de la CNSC, Proceso de Selección No. 1487 de 2020 - Distrito Capital 4.

Lo anterior, pese a que el artículo 14 del Decreto **Legislativo** 491 del 28 de marzo de 2020 claramente establece el aplazamiento de los procesos de selección hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria, y agrega: *“Las autoridades competentes deberán reanudar dichos procesos **una vez se supere la Emergencia Sanitaria.**”*

Sin embargo, el Gobierno Nacional reactivó erróneamente los concursos con una norma de menor jerarquía como lo es el Decreto **Reglamentario** 1754 de 2020, rompiendo los lineamientos constitucionales y legales de la jerarquía normativa, incurriendo en el vicio de haber sido expedido con infracción de las normas en las que deberían fundarse, excediendo los parámetros de la potestad reglamentaria al derogar tácitamente la norma que se planteó reglamentar; en síntesis, el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1754 de 2020 al pretender reactivar los procesos de selección no reglamentó el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020 sino que intentó infructuosamente derogarlo incurriendo en una nulidad.

Esta nulidad del Decreto Reglamentario 1754 de 2020 fue demanda desde el 27 de enero de 2021 ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa repartida al Juzgado Cuarto (4) Administrativo Sección Primera Oral de Bogotá con número de radicación 11001333400420210002600, y enviada por competencia al Honorable Consejo de Estado, sin que a la fecha se haya pronunciado sobre la medida cautelar de suspensión provisional. En ese mismo orden de ideas, el 16 de abril de 2021, se procedió a demandar la nulidad del Acuerdo No. 0409 del 30 de diciembre de 2020 ante el Honorable Consejo de Estado, sin que a la fecha exista pronunciamiento al respecto.

Sexto. El proceso de selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4 una vez culminadas sus etapas de convocatoria y divulgación, adquisición de derechos de participación e inscripciones y la verificación de los requisitos mínimos, se encuentra actualmente en el

proceso de citación a la presentación de las pruebas escritas para el domingo 18 de julio de 2021 únicamente en la ciudad de Bogotá Distrito Capital.

Séptimo. Actualmente me encuentro inscrito y admitido al proceso de selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020 en el cargo denominado profesional universitario, en el nivel jerárquico profesional, código 219, grado 13 y número OPEC [137241](#).

Octavo. Para la realización de las pruebas escritas, la Unilibre debía establecer el protocolo de bioseguridad, en cumplimiento del numeral 7.1 del artículo 7 de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud. Sin embargo, la Unilibre expidió unas Guías de orientación al aspirante para las pruebas escritas mas no el protocolo de bioseguridad requerido.

En virtud de una de las guías de orientación al aspirante¹, sólo a través del ítem **“9.8 Medidas de bioseguridad”** se establecen disposiciones en lo concerniente a los protocolos de bioseguridad al momento de la presentación de la prueba, de esta manera se expresa que:

“(…) una vez el concursante se encuentre en el lugar de aplicación, deberá seguir los protocolos de bioseguridad, dentro de los cuales tendrá un proceso de limpieza y desinfección con alcohol y gel antibacterial para poder empezar su prueba. Adicionalmente, deberá mantener distancia de mínimo 1 metros, usar su respectivo tapabocas, el cual no podrá quitarse en ninguna circunstancia. Finalmente, en caso de requerir medidas especiales para la aplicación, estas serán publicadas a través de SIMO.”

Noveno: No obstante, lo cierto es que tal disposición no se puede entender como el cumplimiento de la Resolución 777 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, puesto que **no establece las medidas, los protocolos de bioseguridad requeridos ni las condiciones óptimas para el desarrollo de las pruebas escritas dependiendo del ciclo en el que se encuentra la capital donde serán efectuadas las pruebas.**

Este Ítem se limita a mencionar solamente la aplicación de los protocolos de bioseguridad por parte del concursante con el distanciamiento de un (1) metro de distancia, pero en ningún momento hace mención a la cantidad máxima de personas ni al aforo máximo, así como tampoco de las medidas de desinfección para el personal logístico y de ingreso y salida al sitio de aplicación de la prueba escrita (protocolo y medidas de bioseguridad) incumpliendo de esta manera los artículos 4, 6 y 7 de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud.

Las condiciones para el desarrollo de las actividades sociales y del Estado deberán realizarse por ciclos, que para el caso en concreto, estas deben surtir de acuerdo al ciclo 1 en el que se encuentra Bogotá donde serán efectuadas las pruebas. **Bogotá** se encuentra en el ciclo 1 por tener a 6 de julio de 2021 vacunada apenas el 43.60% de la población priorizada en la fase 1 (Etapa 1, 2 y 3) ² y por tener una ocupación de camas de UCI superior al 85% ³, indicando claramente que la reunión de concursantes a

¹CNSC y Unilibre.Guia de orientación al aspirante.2021.PDF.Extraido de: <https://www.cns.gov.co/index.php/guias-distrito-capital-4?download=43689:gua-de-orientacion-al-aspirante-pruebas-escritas>

2

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjo1NTNmZTJmZWYtOWFhMy00OGE1LWFiNDAtMTJmYjM0NDA5NGY2IiwidCI6ImJmYjdlMTNhLTdmYjctNDAxNi04MzBjLWQzNzE2ZThkZDhiOCJ9>

³ <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/ocupacion-ucis/>

presentar el examen **no puede superar las 50 personas**, independiente del aforo total de acuerdo a la capacidad de la infraestructura.

Así pues, si el domingo 18 de julio de 2021 se realizan las pruebas escritas sin expedir e implementar un adecuado protocolo de bioseguridad que debe ser adoptado por la Unilibre, los concursantes y los responsables de hacer cumplir los protocolos **no** sabrán cuál aforo máximo cumplir ni cómo garantizar las demás medidas de bioseguridad que se requieren en pro de esta actividad social y del Estado, pues se desconoce el protocolo a implementar el día de aplicación de la prueba.

Muchas personas sanas se exponen a ser contagiadas, personas asintomáticas del COVID-19 pueden contagiar a otras sin saberlo, e incluso, personas que saben que están contagiadas irán a presentar la prueba escrita porque es su única oportunidad de acceder a un empleo público, y todo lo anterior porque: 1) los procesos de selección se adelantan ilegalmente puesto que, se encuentra vigente el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y 2) la carencia de implementación en el protocolo de bioseguridad que debió ser expedido obligatoriamente por parte de la Unilibre, incumpliendo de esta manera los artículos 4, 6 y 7 de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud.

Décimo. Teniendo en cuenta la situación actual del país en cuanto a un prolongado tercer pico de contagio de COVID-19, y a pesar del avance de los programas de vacunación en la capital del país, el descuido y desconocida existencia del protocolo que debió ser establecido por la Unilibre, se pone en grave riesgo mi derecho fundamental a la salud al exponerme a un contagio con las consecuencias para la vida que pueda tener, por no implementar debidamente la existencia de sus protocolos a lo establecido por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021.

Esto sumado a la ilegalidad de la reactivación de los procesos de selección mediante el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1754 de 2020 en contravía del artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que lesiona mis derechos fundamentales al trabajo y a acceder a cargos públicos, además de vulnerar los principios de legalidad y debido proceso.

Once. Aunado a lo anterior la CNSC no se pronunció en ningún momento frente a las situaciones en la cuales si llegado el caso, el participante llegue a estar contagiado de covid-19 y no sea posible asistir a las pruebas.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Planteamiento del Problema Jurídico.

En la presente acción de tutela se debe determinar si la carencia en la implementación del protocolo de bioseguridad para la aplicación de pruebas escritas en el Proceso de Selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4 vulnera mis derechos fundamentales a la salud, al trabajo y al acceso a los cargos públicos, por no cumplir con los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado establecidos en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 por el Ministerio de Salud y Protección social, bajo el entendido que **NO** existe el protocolo que establezca medidas de bioseguridad generales para Distrito Capital- Bogotá donde se realizará la prueba sin tener en cuenta los ciclos según su cobertura de vacunación y las medidas sanitarias y de bioseguridad descritas por la Resolución 777 del 2021.

También se debe determinar si la ejecución del proceso de selección sustentado en un ilegal Decreto Reglamentario 1754 de 2020 en contravía de norma de mayor jerarquía como lo es el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020 lesiona mis derechos fundamentales al trabajo y a acceder a cargos públicos, además de vulnerar los principios de legalidad y debido proceso.

Para determinar la vulneración se hará el siguiente análisis de procedibilidad para el caso en concreto.

Procedibilidad de la Acción de Tutela.

La acción de tutela se erige como un mecanismo de rango constitucional, instituido para amparar los derechos fundamentales de las personas cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este procedimiento tiene un carácter residual o subsidiario, y, por tanto, sólo procede cuando la persona afectada en sus derechos fundamentales no dispone de otro medio de defensa judicial para que se restablezca el derecho vulnerado o para que desaparezca la amenaza a que está sometido, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales, toda acción de tutela procede cuando se cumplen unos requisitos generales de procedibilidad, en resumen, cuando:

1. No existen otros recursos o medios de defensa judiciales, con lo cual actúa como mecanismo definitivo; o
2. Existen recursos o mecanismos de defensa judiciales, pero se requiere como mecanismo transitorio:
 - a. Para evitar un perjuicio irremediable.
 - b. Los recursos disponibles no son idóneos ni eficaces para la defensa del derecho constitucional alegado.
3. Se cumple la inmediatez y la acción es instaurada de forma oportuna.

La presente acción de tutela es procedente dado que no existe otro mecanismo judicial que pueda ser accionado contra la CNSC y Unilibre con miras a implementar el protocolo de bioseguridad, dado que proviene de instituciones privadas.

Igualmente, el Honorable Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del Decreto Reglamentario 1754 de 2020 en el marco del proceso judicial de nulidad simple repartido al Juzgado Cuarto (4) Administrativo Sección Primera Oral de Bogotá con número de radicación 11001333400420210002600 así como tampoco de aquella sobre el Acuerdo 0409 del 30 de diciembre de 2020.

En el caso que el juzgado considere que sí existe otro mecanismo judicial (el cual se desconoce), la presente acción de tutela es igualmente procedente dado que los tiempos de cualquier otro procedimiento judicial lo hace ineficaz para la protección de los derechos invocados.

En ese orden de ideas, atendiendo a la especialidad y rapidez de la tutela como medio idóneo para prevenir perjuicios irremediables de derechos fundamentales, es procedente la presente acción contra las entidades responsables de que debieron emitir (en este caso sobre su omisión) el protocolo de

bioseguridad para la presentación de la prueba escrita del Proceso de Selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4.

Alcance y fundamento de la protección al derecho fundamental de la salud en el contexto del COVID-19.

De manera general, en cuanto al fundamento del derecho fundamental de la salud, resulta necesario indicar que este derecho ha atravesado un proceso de evolución jurisprudencial y legislativo, cuyo estado actual implica su categorización como derecho fundamental autónomo. Su estado actual de derecho fundamental deviene de la Ley 1751 de 2015 que en su artículo segundo refiere lo siguiente:

ARTÍCULO 2o. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. *El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.*

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.

Desde el ámbito internacional, se ha destacado que este derecho implica que se les asegure a las personas, tanto individual como colectivamente, las condiciones necesarias para lograr y mantener el “*más alto nivel posible de salud física y mental*” en los términos del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.

Esto puede ser entendido en su forma más amplia como un mandato de optimización que en todo caso no debe ser limitado a la prestación de los servicios curativos de enfermedades y patologías, sino que el derecho fundamental a la salud debe abarcar muchos otros ámbitos de protección como lo es en este caso particular el llamado a la prevención.

Ahora bien, en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19, mediante sentencia C-145-20 la Honorable Corte Constitucional expuso como los efectos de la pandemia podían vulnerar derechos fundamentales de la siguiente forma:

“La grave situación de calamidad pública sanitaria, su crecimiento exponencial, los altos índices de mortalidad y los efectos perjudiciales sobre el orden económico y social, involucran afectaciones o amenazas intensas sobre los derechos constitucionales de los habitantes del territorio nacional, a saber, la salud, vida, seguridad, libertad de locomoción, derechos de población vulnerable y enfoque diferencial, trabajo, subsistencia digna, mínimo vital, seguridad alimentaria, libre empresa, etc., así como repercusiones graves sobre las finanzas del Estado.”

En conclusión, el Estado es la principal figura llamada a intervenir y diseñar las políticas de prevención a causa del COVID-19 como garante de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.

Cumplimiento de protocolos como medida necesaria para salvaguardar el derecho a la salud.

Para la Corte Constitucional, mediante sentencia C-205 de 2020 dejó claro que la facultad de expedir protocolos de bioseguridad está encaminada a conjurar la grave situación generada por la pandemia, ya que la creación de estos instructivos es un presupuesto dirigido a controlar el contagio y minimizar los riesgos a los cuales se ve expuesta la población ante la reactivación de los sectores de la economía, la sociedad y la administración pública, con posterioridad al aislamiento preventivo obligatorio. De tal forma, esta medida persigue materializar la obligación del Estado de preservar el derecho a la salud, al trabajo en condiciones dignas y a la vida de los residentes en el territorio nacional frente al COVID-19.

En palabras de la Corte:

Con todo, la Corte colige que la necesidad de incorporar medidas de protección para la ciudadanía materializa el modelo de Estado social de derecho, el cual se caracteriza por garantizar, en términos generales, un amplio catálogo de derechos fundamentales bajo unos principios fundantes y cuyo objetivo es la garantía de unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida digna, plena en el ejercicio de derechos y en condiciones de bienestar para todos los colombianos, representado en la protección y defensa de los principios, obligaciones y mandatos fundamentales de la Carta.

(...)

Ello cobra vital importancia al momento de analizar las medidas que ha debido adoptar el Gobierno Nacional en atención a la contención y mitigación de la pandemia del COVID-19, puesto que la finalidad de las decisiones estatales no puede desconocer el referido eje axial del Estado y debe propender por su materialización en la legislación excepcional. En concreto, la adopción de los protocolos de bioseguridad persigue la efectividad del principio de dignidad humana y del derecho al trabajo en condiciones justas y dignas. Estas directrices sin lugar a duda constituyen medidas de protección al trabajador que, en criterio de la Corte, respetando la autonomía de los individuos, pretenden materializar y fortalecer valores como la vida, la salud y la integridad física.”

III. CONCEPTO DE LA VULNERACIÓN

La Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social se circunscribe como una herramienta que tiene por objeto controlar el contagio **asincrónico** de las regiones del país. Esto quiere decir que en el territorio nacional los picos y niveles de contagio son diferentes entre una ciudad y otra; en palabras del Ministerio en sus considerandos se expresa que:

“el país ha tenido tres grandes picos de contagio, con una última aceleración entre marzo y abril, la cual ha comenzado a presentar una reducción de su velocidad, especialmente en las regiones que comenzaron el tercer pico más temprano como Antioquia, Barranquilla, La Guajira y Santa Marta. En otras regiones del país, se presentaron terceros incrementos más pequeños como es el caso de Chocó, Arauca, Tolima o Casanare, dado su mayor dispersión o su alta seroprevalencia. Por su parte, existen zonas que luego de un ascenso tienden a la estabilidad en su transmisión como es el caso de Caldas, Cauca o Nariño. Finalmente, en otras regiones del país debe persistir la observación como Boyacá, Cundinamarca, Santander y Bogotá que todavía presentan una curva ascendente de contagios.”

En ese orden de ideas, bajo la necesidad de los retornos progresivos de las actividades del Estado, la implantación de los criterios y condiciones regulados en los artículos cuarto, seis y siete de la Resolución se aplica de acuerdo al ciclo en el que se encuentre el municipio (en este caso Bogotá, ciclo 1) y con reglamentación de medidas y protocolos de bioseguridad que propendan por el adecuado desarrollo de actividades sociales y del Estado como lo es la aplicación de las pruebas escritas.

Fíjese que al no existir el protocolo de bioseguridad para la aplicación de pruebas escritas dentro del proceso de selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4 y aunque se quisiera contar con la disposición ambigua y mediocre del **Ítem 9.8 Medidas de bioseguridad** de la Guía de orientación al aspirante, esta **NO** contempla de ninguna forma estos ciclos y establece unas medidas bastante generales que no logran diferenciar las medidas y protocolos de bioseguridad necesarias y requeridas en el desarrollo de actividades sociales y del Estado.

Como se mencionó en los hechos, para el caso de Bogotá esta ciudad se encuentra en el ciclo 1 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 777 del 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Frente a esta situación concreta, la Resolución 777 establece para el caso distrital la condiciones para el desarrollo de sus actividades (incluidos los eventos de presentación de pruebas escritas) la NO superación de 50 personas. Además de la implementación del Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del Covid-19.

No obstante, **la carencia del protocolo de bioseguridad y del que se quisiera disponer como tal (Ítem 9.8 Medidas de bioseguridad de la Guía de orientación al aspirante) para la aplicación de las pruebas escritas NO desarrolla ninguna medida y protocolo de bioseguridad ni ningún elemento de bioseguridad que tenga en cuenta las condiciones de aforo máximo de acuerdo el ciclo, o como lo es en el caso concreto de Bogotá un límite de personas permitidas para presentar la prueba.**

Es preciso indicar que el establecimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad, y sobre los requisitos de aforo máximo o límite de personas no es un capricho del Gobierno, sino que son medidas indispensables para evitar y controlar las cadenas de contagio. Estas medidas son tomadas con un criterio científico que permite prever los impactos de estas medidas en los contagios de las personas por COVID-19 en el territorio Nacional.

Es así que esta inobservancia de la CNCS y la Unilibre en cuanto a la carencia en expedición de un protocolo abstracto que tenga en cuenta las circunstancias de contagio que afronta el país, en especial el Distrito Capital- Bogotá pone en grave riesgo mi derecho fundamental de la salud y de manera general el derecho de la salud de todos los aspirantes que se encuentran en sectores del distrito capital más contagiados por ocasión de la pandemia del COVID-19.

Ahora bien, en torno a la vulneración al derecho al trabajo y al acceso a cargos públicos, la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-205 de 2020, estableció que la debida ejecución de los protocolos de bioseguridad es un derecho social que tienen los trabajadores en cuanto a gozar las condiciones de trabajo satisfactorias que garanticen la seguridad e higiene de los empleados. Como quiera que en el presente caso estamos ante una convocatoria del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva, para lo cual se puede afirmar que la CNCS y la Unilibre está vulnerando las oportunidades de acceso al trabajo y a los cargos públicos al promover condiciones inseguridad de bioseguridad para los aspirantes al Proceso de Selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4.

IV. PETICIONES

Con base en lo anterior, solicito respetuosamente a este despacho:

PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales a la **salud, al trabajo y al acceso a cargos públicos**.

SEGUNDO. ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC y la Universidad Libre-Unilibre que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, adopte e implemente un protocolo de bioseguridad para la prueba escrita del proceso de selección No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4 que esté acorde con los lineamientos de la Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a las medidas y protocolos de bioseguridad, y que dentro del Distrito Capital de Bogotá, sitio de aplicación de la prueba escrita cumpla con los criterios y condiciones establecidos de acuerdo con el ciclo 1 en que se encuentra esta ciudad en razón a la cobertura de la vacunación de la población priorizada de la Fase 1 (etapas 1, 2 y 3) y el índice de resiliencia epidemiológica municipal (IREM).

TERCERO. ORDENAS a la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC y la Universidad Libre-Unilibre que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, informe y publique cuáles serán las medidas que van adoptar en el hipotético caso de que para el día de prueba me encuentre contagiado de Covid-19.

CUARTO. En caso de no cumplirse lo ordenado por usted Señor(a) Juez Constitucional, se continúe con lo previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.

V. PETICIÓN ESPECIAL – MEDIDA PROVISIONAL PARA EVITAR EL PERJUICIO IRREMEDIABLE.

Solicito señor(a) Juez respetuosamente se sirva de suspender la fase de la presentación de la etapa escrita del Proceso de Selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4 por **NO** cumplir con los criterios mínimos de bioseguridad establecidos en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Procedencia de la medida provisional

En el presente asunto, es inminente la realización de la prueba escrita, por lo cual se necesita por parte del juez constitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 259 de 1995 que indica lo siguiente:

*“ARTÍCULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, **suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.***

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.”

Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia de este máximo tribunal, es posible suspender provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la presentación del derecho, lo cual exige un esmerado estudio de la pertinencia de la medida cautelar.

En este aspecto se puede evidenciar lo siguiente:

1. Se advierte una vulneración expresa al derecho fundamental de la salud, por cuanto siendo el Estado la máxima autoridad encargada de garantizar este derecho, se omite la implementación del protocolo de bioseguridad para la presentación de la prueba escrita del Proceso de Selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4 y consigo los criterios y condiciones en la adopción de medidas y protocolos de bioseguridad para el desarrollo de la prueba escrita poniéndome en grave riesgo a mi persona y a los demás aspirantes.
2. Se advierte que dicha suspensión es una medida urgente y necesaria, ya que la prueba será realizada dentro de una semana, y de no existir un pronunciamiento urgente por parte de este despacho, quizás se materialice el perjuicio irremediable que se busca prevenir.
3. Toda vez que la medida solicitada guarda una estricta relación con el derecho invocado, es una medida apenas razonable para que el juez en sede tutela se pueda pronunciar de fondo sobre la presente solicitud de amparo constitucional.

VI. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto **no** haber presentado petición similar por los mismos hechos y derechos ante alguna autoridad judicial.

VII. PRUEBAS Y ANEXOS

En orden a establecer la violación de los derechos fundamentales vulnerados cuya protección se invoca, solicito respetuosamente se sirva practicar y tener como pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES:

- Copia de Cédula de ciudadanía del suscrito.
- Citación a la prueba escrita del Proceso de Selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4.

- Resolución 777 del 2 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas dentro del proceso de selección de la Secretaría Distrital de Movilidad No. 1487 de 2020- DISTRITO CAPITAL 4.

DE OFICIO: Las que considere pertinentes usted Señor(a) Juez Constitucional para establecer con claridad los hechos.

VIII. COMPETENCIA

Es usted, Señor(a) Juez Constitucional, competente para conocer de esta Acción de Tutela por tener jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 de reparto de la acción de tutela del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho que indica que: *“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.”*

IX. NOTIFICACIONES

La demandada Comisión Nacional del Servicio civil en la carrera 12 No 97-80, piso 5, de Bogotá, D.C.; teléfono PBX: 57 (1) 3259700; correo electrónico: notificacionesjudiciales@cns.gov.co

Universidad Libre sede Candelaria en la Calle 8 No. 5-80, sede Bosque Popular en la Carrera 70 No. 53-40 de Bogotá, D.C.; teléfono (571) 3821000- 423 2700 correo electrónico: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co.

Por mi parte, recibiré las notificaciones en el correo electrónico: julian_camargo.c@hotmail.com
Telefono: 310 266 8217

Del señor(a) juez, respetuosamente:



JULIAN RICARDO CAMARGO CASTRO
C.C. 1.052.396.422 de la ciudad de **Duitama**